



EL REGRESO DE LA POLÍTICA EN BOLIVIA: MOVIMIENTOS SOCIALES Y NUEVO PROTAGONISMO DEL ESTADO EN LA ORIENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LOS ALBORES DEL NUEVO MILENIO

The return of politics in Bolivia: new social movements and the new role of the state in the direction of the society at the dawn of new millennium

Javier Recabarren¹. jerecaba@uc.cl

Recibido: 3 de mayo de 2010 **Aprobado:** 22 de septiembre de 2010

Resumen: El objetivo del artículo, es comprender las implicancias, en términos discursivos y prácticos, que tuvieron las demandas de los movimientos sociales así como la llegada al poder del MAS, con Evo Morales como Presidente, en la relación que se produce entre economía, sociedad y política. De este modo, y fundamentalmente a través del análisis teórico de la diferenciación funcional y clausura operativa de los sub-sistemas político y económico de Niklas Luhman y Nobert Lechner, la hipótesis central que está presente, es que las demandas de los movimientos sociales hacia el sistema político junto a la victoria de Evo Morales en las elecciones presidenciales de 2006, marcan el inicio de una nueva lógica entre la política y la economía, donde se asume el primado de la primera por sobre la segunda como eje ordenador de la relación entre gobierno y sociedad, y que se ha materializado, principalmente, en un Estado más regulador en el ámbito económico e incluyente en el plano político.

Palabras clave: Bolivia – Diferenciación funcional y clausura operativa de sistema – Evo Morales – Movimiento sociales

Abstract: The aim of this paper is to understand the implications, in discursive and practical terms, which took the demands of the social movements as well as the rise to power of the MAS, with Evo Morales as President, in the relationship among economy, society and politics. In this way, and mainly through the theoretical analysis of functional differentiation and operational closure of the political and economic subsystems from Niklas Luhman and Norbert Lechner, the main hypothesis in this work, is that the demands of the social movements in the political system with the victory of Evo Morales in the

¹ El autor es Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y egresado del Magíster de Estudios Políticos y Sociales Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado.

presidential election in 2006, they mark the beginning of a new logic between politics and economics, which assumes the primacy of the first one over the second one as the articulator of the relationship between government and society, which has resulted mainly in a more regulatory State in the economic field and inclusive State in the political field.

Keywords: Bolivia – functional differentiation and operational closure of systems – Evo Morales – Social movement.

I. INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2005, por primera vez en la historia de Bolivia un indígena – a la vez dirigente sindical- es investido como Presidente. El triunfo de Evo Morales junto a su partido político, el Movimiento al Socialismo, MAS, ganaron las elecciones con el 53% de los votos, con lo que se escribió, al mismo tiempo, un segundo hecho histórico: por primera vez un Presidente boliviano era elegido por mayoría absoluta y el Congreso no debía elegir entre las dos candidaturas con más alta votación.

Estos dos acontecimientos no vienen sino a iluminar un proceso más amplio de reivindicación histórica de todos aquellos grupos sociales que habían sido excluidos de los beneficios modernizadores y las decisiones políticas, y que se forja a partir de dos memorias principales; la más larga, de aquella histórica exclusión tanto en los tres siglos coloniales como los casi doscientos años de vida republicana, y en el corto plazo, el amargo sabor que dejaron los veinte años de un neoliberalismo privatizador que no trajo los beneficios que la clase política prometió. Por lo que el proceso que emerge hacia mediados de 1990 -para intensificarse a comienzos del siglo XXI-, de protestas y luchas de los movimientos sociales bolivianos, junto a una etnificación e indianización cada vez más marcada en la escena política, y que terminan por coronar a un presidente que toma de estos dos procesos las demandas de inclusión, democracia y un estado más regulador en lo social y económico, constituyen, en nuestro análisis, el regreso de la política como eje ordenador de la sociedad boliviana.

El presente trabajo, por tanto, tiene como objetivo comprender, a la luz del proceso histórico de reformas neoliberales llevadas a cabo en latinoamericana y así en Bolivia en la

década de 1990, las implicancias, en términos discursivos y prácticos, que tuvieron las demandas de los movimientos sociales así como la llegada al poder del MAS, hacia comienzos de 2006, en la relación entre economía, sociedad y política. La hipótesis central que está presente en este trabajo, principalmente sobre la base de los análisis teóricos de la “diferenciación funcional y clausura operativa de sistemas” de Niklas Luhman y Norbert Lechner, es que en el siglo XXI, y fundamentalmente desde el 2006 en adelante, se comienza a imponer una nueva dinámica entre los sub-sistemas político y económico, donde este último deja de ser el núcleo sobre el cual se piensa a la sociedad boliviana y se articulan las respuestas a sus demandas, prevaleciendo ahora la dimensión político-ética por parte de las autoridades de gobierno como eje de orientación en su relación con la sociedad. Entre los cambios visibles que reflejan esta primacía del sub-sistema político están: el reestablecimiento de la función estatal como ente regulador de la economía, la incorporación tanto en el debate como en las políticas públicas de nuevos actores sociales y, la inclusión de estos nuevos actores en el plano constitucional por medio del cambio de nombre desde República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia y el nuevo régimen de autonomías.

II. ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA NUEVA “REINA” DE LA SOCIEDAD EN LATINOAMÉRICA

Desde mediados de 1970 en algunos países latinoamericanos y, prácticamente en todos tras la crisis de la deuda en la primera mitad de 1980, devinieron reformas económicas estructurales. Principalmente motivadas por presiones externas –ya sea por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o acreedores privados-, los gobiernos latinoamericanos se vieron en la obligación de aplicar medidas radicales para frenar la inflación, atraer inversión extranjera y obtener mayores recursos; así, estas reformas se tradujeron en políticas de shock que, pese a los altos costos sociales como fueron el desempleo, la eliminación o disminución radical de ciertas prestaciones sociales e incluso en muchos países bajas tasas de crecimiento, se consolidaron con el tiempo en un nuevo paradigma para alcanzar el desarrollo económico y el progreso de las sociedades. Tal vez

porque efectivamente lograron disminuir la inflación y crear cierta estabilidad macroeconómica, el consenso de Washington, como se les llamó a estas reformas de mercado, terminaron transformándose en el discurso político oficial, en una suerte de nueva lógica modernizadora que no tuvo, o muy débilmente, una verdadera oposición política.

De este modo el neoliberalismo económico, que ya tenía sus bastiones en los gobiernos de Estados Unidos con Ronald Reagan y el de Inglaterra con Margaret Thatcher, se convirtió en la nueva reina rectora de las sociedades latinoamericanas, adquiriendo una suerte de legitimidad discursiva e institucional de gran envergadura. Sin embargo, tras este fenómeno, aconteció un proceso de exacerbación de aquello que los sociólogos han denominado “diferenciación y clausura operativa de sistemas”. En otras palabras, el sistema económico, al legitimarse políticamente y, en varios lugares socialmente, se estableció como un subsistema altamente autónomo, no regido por anclaje ético alguno; es decir, en palabras de Habermas (1992), con anclaje racional con arreglo a valores (p.450), lo que conllevó altos costos sociales y un malestar profundo en aquellos grupos que se vieron marginados de los beneficios del mercado.

Siguiendo al sociólogo alemán, Niklas Luhmann (2004), lo que aconteció durante las décadas de 1980 y 1990 fue que el sistema económico se fue diferenciando cada vez más de los otros subsistemas conforme a su autopoiesis, permitiéndole ganar en posibilidades de decidir sobre la forma de su diferenciación interna (p.165). Asimismo, parafraseando a Luhmann, esta diferenciación interna del subsistema económico reforzó el proceso externo de diferenciación de los otros subsistemas, como fue el caso de la política (p.165); de esta manera, los temas económicos comenzaron a constituirse en la masa más importante de los discursos políticos, mientras que otros temas esenciales, como las identidades étnicas o la religión, fueron perdiendo preponderancia política (p.164), al tiempo que el Estado, quien fuera el eje rector que regulaba la sociedad, disminuyó su poder de decisión frente a la autonomía económica expresada en las transnacionales y los grandes capitales.

Las reformas de mercados en Bolivia, se comenzaron a establecer tras el fracaso del gobierno reformista de la Unidad Democrática Popular, UDP, compuesto por tres partidos de

izquierda. De este modo, en medio de una crisis hiperinflacionaria, caída en los precios del estaño, y las presiones de la derecha empresarial, se comenzó a dismantelar el Estado fundado por la revolución nacional de 1952. Y, por paradojas de la historia, el mismo hombre que lideró la revolución con un programa de mayor intervención estatal, nacionalización de las minas y reforma agraria, es decir Víctor Paz Estensoro, volvió en 1985 a liderar un nuevo proceso de reformas pero ahora desde una lógica conservadora (Stefanoni, 2007).

La segunda oleada de reformas económicas en Bolivia, donde se efectuaron la mayor cantidad de privatizaciones con un marcado estilo tecnicista y apolítico, fueron las realizadas por el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada entre 1993 y 1997. Como explica el economista Franz Barrios (2007), el neoliberalismo en Bolivia fue aplicado del mismo modo que en otros países del continente, como fue el caso de Chile, creyéndose a ciegas en el evangelio de los economistas neoliberales donde el Estado productor debía ceder paso al Estado regulador y subsidiario (p.154). A lo que le agrega que, en la época dorada de las privatizaciones, “no existía posibilidad alguna de escudriñar el proceso, y ni hablar de procurar pararlo, aunque fuera por razones técnicas. El oscurantismo fue tal que solo muchos años después se pudo tener acceso a la información de ese bazar monumental de venta de activos estatales” (p.149). Lo que más afectó al pueblo boliviano, siendo las causas principales de las protestas de los movimientos sociales desde el 2000 en adelante, como se analizará, fueron las privatizaciones de empresas públicas llevadas a cabo durante la década de 1990, que adoptó la forma de una asociación estratégica entre Estado y las compañías transnacionales denominada “capitalización”, en sectores como los hidrocarburos, energía eléctrica, telecomunicaciones, ferrocarriles y transporte aéreo. Y de entre ellas, tal vez la que más perjuicio causó, fueron los relacionados con los hidrocarburos, al crearse una Ley que determinó condiciones tributarias altamente favorables para las nuevas empresas incorporadas al sector (Grebe, 2009, p.142).

Fue ese mismo “oscurantismo” y “demagogia” con el que los políticos mostraron como necesario todo el proceso de reformas, lo que llevó a que nunca se supiera con certeza las cuantiosas pérdidas que se produjeron. Como bien analiza el economista Joseph Stiglitz (2003) en *El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina*, en la

mayoría de los países latinoamericanos, dentro de los cuales está Bolivia, el crecimiento económico durante la década de 1990 fue menor a las décadas anteriores a 1980, la pobreza aumentó, la distribución del ingreso se deterioró y trajo un componente simbólico de falsas promesas con el consiguiente malestar general de la población (Stiglitz, 2003).

Como se observa entonces, este alto grado de diferenciación y autonomía que adquirió el subsistema económico operó con un débil marco valórico-normativo, en la medida que produjo, como reacción, el repliegue del subsistema político que otrora regulara a la sociedad a través del Estado: es lo que el sociólogo Manuel Antonio Garretón, llamó la Matriz Nacional-Popular latinoamericana y que en el caso de Bolivia se constituyó a partir de la revolución nacional de 1952. En ese período, la política estatal era el motor del desarrollo económico, basado en el fortalecimiento de la industria nacional y la incorporación paulatina de los sectores marginados de la sociedad. Sin embargo, siguiendo a Norbert Lechner (1996), con la crisis del Estado Nacional-Popular, entre mediados de 1970 y 1980, se puso en entredicho el lugar de la política como núcleo rector del desarrollo social; el papel de la política y la democracia como instancia privilegiada de representación y coordinación de la vida social se volvió problemático (p.8). Sin embargo, lo “problemático” de ese fenómeno, es que las sociedades no son realmente capaces de autorregularse a partir de mecanismos espontáneos, pues la vida en sociedad exige de instituciones y procedimiento de coordinación con valores éticos que sólo la política puede entregar. En caso contrario, como se dio en gran parte de los países latinoamericanos, la política y las relaciones sociales se mercantilizan y la sociedad se disgrega, mientras que los sujetos-ciudadanos se transforman en sujetos-consumidores.

Por último, y esto fue muy claro en el caso boliviano, la institucionalidad democrática subsistió, mas como afirma Lechner, lo hizo “despojada de sus funciones de representación y regulación social, como un sistema autorreferido, cuya lógica interna se independiza de los impulsos (demandas, apoyos) externos y, por el contrario, descarta cualquier tema que cuestione la estabilidad del sistema” (p.12). De este modo, se produjo un fenómeno donde el sistema político perdió contacto con la vida ciudadana, sus problemas y demandas. Las protestas y luchas de los movimientos sociales en Bolivia, junto a la emergencia de la

identidad étnica en el escenario político, fueron una respuesta contundente frente a esa lógica economicista neoliberal, así como a la pérdida de las atribuciones del sistema político por regular y conectar con los intereses sociales del pueblo boliviano.

III. EMERGENCIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA ETNIFICACIÓN DE LA POLÍTICA

Durante el período neoliberal de Sánchez de Lozada, hubo algunos hechos que favorecieron, en parte, la presencia de sectores antes excluidos de la sociedad en la esfera política: el primero, tiene que ver con la apropiación que hizo el gobierno del discurso multicultural de las organizaciones internacionales, que lo llevó al reconocimiento constitucional de Bolivia como un país pluricultural y multiétnico. Si bien fue ante todo un reconocimiento simbólico, trajo una limitada incorporación y aceptación de los pueblos indígenas en la esfera política. Un segundo hecho ya más relevante, fue la promulgación de la Ley de Participación Popular de 1994, que tenía como objetivo descentralizar la administración política del país creando 311 municipalidades y constituyendo poder local allí donde apenas existía. De este modo, las municipalidades se constituyeron en una fuente importante de poder local, que le permitió a la población indígena, así como a los campesinos de zonas rurales, espacios para reglas propias: ya para las elecciones municipales de 1995, el 29% de los concejales fueron de origen indígena-campesino (Vergara, 2007, p.58).

La Ley de Participación Popular tuvo otro efecto con importantes consecuencias futuras, al permitirle al movimiento cocalero del Chapare, del cual Evo Morales era dirigente sindical, conseguir sus primeros cargos públicos. Fue así que, 1995, las organizaciones sindicales campesinas decidieron institucionalizarse organizando un partido político que llamaron Movimiento al Socialismo, MAS, y transformar su movimiento social en una fuerza electoral. De este modo, las organizaciones cocaleras del Chapare dieron su primera sorpresa en las urnas al quedarse con todas las alcaldías y concejales, dando sus primeros pasos en la escena política institucional. Desde ese momento, la defensa de la coca, que era

atacada por el gobierno boliviano y las presiones estadounidenses, quedó reforzada por estructuras institucionales y fuentes estables de recursos (Archondo, 2009, p.85).

En las elecciones parlamentarias de 1997, el MAS continuó ensanchando su base electoral al instalar a cuatro representantes en la Cámara de Diputados, y donde Morales se convirtió en el diputado más votado de Bolivia con el 70% de los votos. No obstante estos triunfos, desde el año 2000 en adelante comenzó a gestarse un proceso donde los protagonistas de la escena política fueron los movimientos sociales junto a sus líderes, principalmente constituidos por campesinos e indígenas, que bajo la presión de la frustración social se movilizaron en contra de todo gobierno que continuase silenciando sus derechos y demandas. Se dio así inicio a un fenómeno particular en Bolivia donde los sectores históricamente marginados comenzaron a oponerse desde dos flancos: por una parte ampliaban a sus representantes políticos y, por el otro, se movilizaban en las calles. Es decir, cuando las limitaciones institucionales se hacían palpables, el movimiento activaba sus resortes extraparlamentarios para presionar las medidas de los gobiernos de turno (p.86).

Desde un plano teórico, la importancia de esta irrupción de los movimientos sociales la podemos entender a partir del análisis que realiza el sociólogo francés, Alain Touraine, en el sentido de la relación de estos con el sistema político y la democracia. Hemos dicho ya, que con la vuelta a la democracia en Bolivia en 1982, y luego con la instalación de las reformas de mercado desde 1985, se fue produciendo en este país una brecha cada vez más honda entre los ciudadanos y sus representantes políticos. Por esto son pertinentes las palabras de Touraine cuando afirma que los movimientos sociales y la democracia están estrechamente ligadas: la democracia sería el instrumento y el resultado de la institucionalización de los conflictos sociales, mientras que sin ellos, la democracia se debilita (Touraine, p.225). De aquí, dirá Touraine, que una de las formas para medir la fortaleza democrática de un sistema político es a través de su capacidad de elaborar y legitimar las demandas sociales, es decir, de aportar respuestas institucionales a ellas (p.246).

Las elites políticas bolivianas, durante el período neoliberal, no lograron sintonizar con sus representantes al no tener la voluntad ni la capacidad política para legitimar aquellas

demandas y malestar frente al modelo económico imperante. De ahí que un conjunto de organizaciones sindicales campesinas, indígenas y vecinales, se articularan en torno a ciertos objetivos que tenían el común rechazo al neoliberalismo y los partidos políticos tradicionales. En lo concreto, lo que detonó la crisis y la irrupción violenta de los movimientos sociales fue la privatización de los suministros de agua de Cochabamba, decretado por el gobierno del Presidente Boliviano, Hugo Banzer, en 1999. Las molestias no se hicieron esperar, debido a que la privatización produjo un fuerte incremento en los precios de consumo, conformándose una coalición urbana-rural llamada “Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida” que apoyó y organizó las protestas sociales. Este conflicto, que fue llamado la guerra del agua, terminó con el gobierno de Banzer cediendo ante las demandas de los movimientos y anulando los contratos con las empresas, lo que permite reflexionar sobre dos hechos que ocurrieron: por una parte, fue el reflejo de un desprecio histórico por parte de la clase política boliviana por las necesidades de los sectores más pobres, y por el otro, la guerra del agua mostró a la sociedad boliviana que una amplia coalición puede ser exitosamente movilizada en contra de compañías transnacionales en la protección de los recursos naturales (Vergara, p.60).

Durante los cinco años siguientes, se produjeron otras movilizaciones importantes, entre ellas, los bloqueos Aymaras a La Paz en 2000 y 2001 y la guerra del gas –que terminó por destituir a dos presidentes, Sanchez de Lozada y Carlos Mesa- entre 2003 y 2005. Parafraseando al periodista boliviano, Pablo Stefanoni, estas acciones tuvieron la virtud de transformarse desde acciones colectivas con intereses particulares a acciones que articularon demandas más globales que tocaban al mismo rol del Estado en la sociedad (Stefanoni, 2007, p.53).

La emergencia de estos movimientos sociales, con un importante componente indígena, llevaron a la identidad étnica, antes prácticamente no tomada en cuenta y sólo percibida de manera folklórica, a estar fuertemente asociada con el poder político. De otro modo, principalmente desde que estalló la guerra del agua y se hizo manifiesto que no podía existir gobernabilidad política mientras no se escucharan las demandas sociales de los pueblos indígenas, los movimientos sociales y sus líderes se convirtieron en una fuente

importante de capital político, e instalaron sus demandas en el centro de la discusión pública.

IV. EL REGRESO DE LA POLÍTICA A TRAVÉS DEL ESTADO

La revolución nacional de 1952, que llevó al poder al Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, bajo una amplia coalición de sectores populares y medios, fue incompleta, pues entre otras cosas, no logró reconocer el pluralismo cultural existente en Bolivia. En vez de ello, intentó homogeneizar, a través del discurso, las distintas etnias e identidades, al tiempo que trató de crear un sistema de dominación patrimonial corporativo sustentado en redes de clientelas y a través de un complejo esquema de prebendas que terminó por superar las posibilidades económicas e institucionales de Bolivia (Calderón, 2007, p.44). Con diferentes matices, esta fue una historia común a los demás países latinoamericanos.

Las reformas estructurales de mercado, apoyadas siempre en pactos interpartidarios, dieron lugar, por lo menos hasta la guerra del agua, a una relativa estabilidad y gobernabilidad, pero como se analizó, no generaron los resultados esperados. En vez de ello, crearon un malestar sociocultural que estalló en movilizaciones sociales y políticas, que terminaron abriendo un nuevo período histórico en Bolivia.

Las movilizaciones y etnificación de la política en las calles, fue sin duda una vía alternativa que tuvo el pueblo boliviano de ejercer su participación política dada la dificultad para expresar sus demandas a través de los mecanismos institucionales debido a la baja sintonía con sus autoridades. Y, como se señaló, tuvo éxito en paralizar aquellas obras que dañaban sus intereses, como lo fue en la guerra del agua y del gas. Pero también es cierto que, al tiempo de las movilizaciones, se estaba gestando en Bolivia una revolución político-institucional iniciada en las elecciones municipales de 1995. En las elecciones presidenciales de 2002, el MAS, con Evo Morales como Presidente, obtuvo el segundo lugar con el 20,94% de los votos, a menos de dos puntos del ganador Jorge Quiroga, al tiempo que ganó ocho senadores y 27 diputados en el Congreso. Por último, la revolución se coronó en las

elecciones Presidenciales de diciembre de 2005, cuando el MAS, sin ninguna clase de alianza partidaria, obtuvo una mayoría absoluta de un 53%, invistiendo al primer Presidente indígena en la historia de Bolivia.

El triunfo de Morales, no sólo tuvo una significancia cuantitativa, sino también cualitativa. Como lo expresó un titular de la BBC Mundo, el triunfo fue también “el parto de una nueva Bolivia”, en tanto el elemento étnico cobró una dimensión de primera magnitud nunca antes visto (Zovatto, 2006). Un elemento que explica lo anterior, dice relación con que en el Censo del año 2001, el 62% de la población boliviana se declaró indígena (Vergara, p.2).

Otra mirada de estos sucesivos triunfos electorales del MAS hasta obtener la presidencia, es a partir del efecto político progresivo que existió, tanto en el discurso como en la práctica, del resurgimiento de una demanda de mayor Estado en la sociedad; el MAS, desde sus inicios, colocó la nacionalización, la redistribución, el control de la economía globalizada por parte del Estado y la inclusión del sentido de lo pluricultural de la realidad boliviana como ejes de sus propuestas. Una de las primeras líneas de su Programa de Gobierno del año 2005, confirma lo anterior: “Planteamos ingresar a una nueva era estatal, recuperando e industrializando los recursos naturales renovables y no renovables, definiendo una explotación sostenible y sustentable de estos recursos, buscando que los beneficios lleguen directamente a la población boliviana” (p.5).

El alto apoyo popular que tuvo Morales, le permitieron implementar una agenda de reformas en las áreas económicas, políticas y sociales, tendientes a transformar la relación entre el Estado y la sociedad, así como entre política y economía. Y este apoyo se logró, en parte, a partir de la construcción de un discurso y una praxis política que supo sintonizar y hacer suyas las nuevas demandas que los movimientos sociales, desde mediados de 1990, fueron estableciendo en el espacio público. Entre ellas, una reivindicación explícita al elemento indígena que, en palabras del Vicepresidente, Álvaro García Lineras, constituyó el núcleo y eje movilizador del MAS (Natanson, 2007, p.163), cosa que no aconteció durante la revolución nacional y mucho menos con los gobiernos democráticos. A este respecto,

interesante es el principio ideológico número 21 del MAS, donde se da cuenta de esta necesidad histórica de reivindicar a las identidades indígenas que, constantemente, habían estado excluidas de las decisiones políticas:

“El Movimiento al Socialismo tomará las medidas necesarias a fin de que, con plena base científica, y originaria de nuestros conocimientos ancestrales y culturales prepare un proyecto integral destinado al desarrollo de la autoestima desterrando el complejo de inferioridad producto de siglos de colonialismo interno y externo” (p.9).

Una de las formas en que se materializaron estas medidas, fue a través de la modificación de la política de tierras. Así, el gobierno promovió una nueva reforma agraria que prevé la distribución de tierras fiscales y latifundios que no cumplan una función económica o social (Deheza, 2007, p.49).

Una segunda bandera de lucha de los movimientos campesino y organizaciones sociales desde el 2000, y que el MAS asumió como propia, fue la creación de una Asamblea Constituyente con el objetivo de refundar Bolivia (p.50). De esta manera, al hacer Morales de la Asamblea Constituyente un compromiso e imperativo de su gobierno para hacer un reconocimiento a todos los sectores, llevó a cabo, durante el primer año de su mandato, los comicios para la elección de los 255 asambleístas. Los resultados de éstas confirmaron el liderazgo del MAS a nivel nacional con 137 puestos. En segundo lugar quedó el partido PODEMOS, de centro derecha, con 60 asambleístas y, en tercer lugar, el MNR con 18 miembros (p.50).

En tercer lugar, y tal vez una de las demandas más relevantes de los movimientos sociales, y eje central del discurso y práctica del actual gobierno, fue la recuperación del control estatal de los recursos naturales. Este tema, por otra parte, fue y es la llave del eje ideológico nacionalista que existe en el MAS, que fue siempre leída como el principio de la reposición de la autoridad estatal frente al capital extranjero y transformación del modelo neoliberal. En lo esencial, el Decreto Supremo lanzado en mayo de 2006, 28.701, fue el que restituyó al Estado la propiedad, posesión, el control total y absoluto del gas y el petróleo. Esto no quiere decir que las empresas extranjeras tuvieron que irse del país, sino que les fue

obligado establecer nuevos contratos donde se cambia el patrón impositivo, siendo ahora ampliamente favorable para el Estado (Stefanoni, p.58). Con esta medida, “el Estado retomó su protagonismo en un sector clave de la economía y redefinió la relación con la inversión extranjera, pero sin atender contra las inversiones realizadas” (Deheza, p.48), al tiempo que pudo aprovechar el alza de los *commodities* a nivel mundial, permitiéndole al Estado ensanchar sus arcas fiscales y llevar a cabo ciertas políticas de protección social.

De este modo, con los mayores ingresos estatales provenientes del alza en los precios de las materias primas y las mejores tributaciones, el actual mandatario ha intentado llevar a cabo una serie de políticas redistributivas como son el aumento del Bonosol –renta anual y vitalicia para las personas mayores de 65 años-, así como el aumento, no excesivo, de los salarios de los trabajadores públicos. Asimismo, en el plano de los derechos laborales y sociales, el gobierno ha trabajado en la reestatización del sistema de pensiones y derogó la libre contratación de trabajadores.

Y en cuarto lugar, el rediseño del Estado y las transformaciones políticas iniciadas por el MAS tienen su punto de culminación, y a la vez un nuevo comienzo, en la promulgación de la Nueva Constitución boliviana. Y afirmamos que es un hito del proceso iniciado el 2006, pues como señalamos, la importancia de la creación de la Asamblea Constituyente era la redacción de un nuevo contrato social, un nuevo texto legal que tendría como objetivo primordial el reconocimiento de la pluralidad cultural y de las distintas tradiciones étnicas bolivianas, así como la creación de las condiciones legales para hacer posible una mayor igualdad e inclusión social y política de éstas (Santos y Hernández, 2009). Asimismo, es un punto de partida en la medida en que para las distintas autoridades de gobierno, la reciente Constitución es una nueva carta de navegación que “descoloniza” a Bolivia de su pasado colonial, republicano y neoliberal (Constitución Política del Estado Boliviano, 2009) y la proyecta hacia un nuevo Estado, más social, igualitario e inclusivo.

Por consiguiente, el objetivo que buscaba el MAS de inclusión legal de la diversidad social boliviana se logra y se expresa en el artículo 1 de la Constitución, cuando se declara que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país" (2009). Este reconocimiento constitucional del Estado boliviano, se profundiza el día 18 de marzo de 2009 cuando, por Decreto Supremo N° 0048 del Ejecutivo, se cambió, no sin cierto rechazo de parte de algunas ex-autoridades², la denominación histórica de Bolivia desde República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia.

En lo formal, ello ha significado utilizar esta nueva denominación en todo acto público y privado del gobierno, sea en Bolivia como en el extranjero, así como en toda documentación oficial. Asimismo, el Directorio del Banco Central de Bolivia decretó el día 9 de junio de 2009 el cambio de leyenda en las monedas bolivianas. De este modo, el 11 de diciembre del mismo año, las primeras monedas de 50 centavos de boliviano dejaron la frase "República de Bolivia" por la de "Estado Plurinacional de Bolivia", al tiempo que se espera incluir una nueva iconografía en los billetes bolivianos donde se cambien los héroes de la independencia, mestizos y criollos, por héroes indígenas³.

Pero yendo más allá de los aspectos formales, el cambio de nombre busca expresar una realidad socio-cultural que existe en Bolivia, donde la diversidad y pluralidad étnica quiere ser reivindicada. En otras palabras, es un cambio de "lentes" sobre el cual el Estado va comprender la unidad de la sociedad, donde lo que sobresale es la diversidad antes que la homogeneidad, una "diversidad" que ahora se la institucionaliza en la Constitución y con el cambio de nombre. Parafraseando al Vicepresidente Lineras, la plurinacionalidad quiere comprender que todos los bolivianos, sean estos mestizos o indígenas, tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades dentro del Estado, y que ninguna debe marginar a la otra sino complementarse y sentirse orgullosos del otro: "Plurinacionalidad es que todos aportemos, todos tengamos derecho y que las oportunidades no sean por apellido, por color

² La oposición al Gobierno manifiesta un rechazo a esta nueva denominación sobre la base que es una mirada unilateral, que abre las puertas al autoritarismo y que hace que prevalezcan los derechos de los indígenas sobre los mestizos. Zoe, "Controversia: de la República al Estado Plurinacional", 2 de agosto de 2009. En: (<http://eju.tv/2009/08/controversia-de-la-repuacute-blica-al-estado-plurinacional>)

³ "Circula moneda con nueva leyenda en Bolivia", Numisma.org, 11 de diciembre de 2009, En : <http://numisma.forum-express.net/nuevos-tipos-de-monedas-y-billetes-f9/circula-moneda-con-nueva-leyenda-en-bolivia-t738.htm#1071>

de piel, por idioma o por vestimenta, que todos tengamos oportunidades sin distinguir idiomas, sin distinguir color de piel, sin distinguir origen ni lengua materna, porque todos somos bolivianos, todos venimos de esa madre que se llama Bolivia” (30 de enero de 2010).

Interesa destacar, que Morales, a diferencia de Felipe Quispe⁴, siempre ha intentado construir un proyecto político nacional, que no se quede sólo en representar a las etnias indígenas, sino también en incluir a mestizos y criollos de sectores medios. Esta es una de las características fundamentales sobre las que ha podido plantear su programa de gobierno, que como se ha visto, ha tenido por objetivo transformar las preocupaciones de los movimientos sociales en asuntos de interés nacional: donde se incluyen la ampliación de la democracia, no sólo política, sino también económica y social; crear un nuevo pacto social a través de una carta magna que hace un reconocimiento a las diversas etnias y culturas existentes en Bolivia; así como atraer para el Estado, mayores porciones de la explotación de sus recursos naturales para poder aplicar políticas redistributivas y ampliar la protección social.

Pero la clave, como propusimos al comienzo, para leer estos cambios políticos y sociales, tanto los ocurridos a nivel de las protestas y luchas de los movimientos sociales como los institucionales, sobre todo partir del triunfo de Morales, está en que la dimensión política se encuentra ahora en el centro de las relaciones y decisiones de poder, tanto a nivel de la ciudadanía como de las autoridades políticas. Esto no quiere decir, por ejemplo, que la esfera económica esté absolutamente controlada por las decisiones políticas y haya perdido total autonomía, pero sí que la política, a través de un Estado más fuerte, propositivo y regulador, ha vuelto a ocupar un lugar de primer orden en la vida colectiva boliviana, introduciendo, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado reciente, principios éticos en la dimensión económica. Interesante en este sentido, es reproducir las palabras del ya citado Vicepresidente, García Lineras, en relación a cómo el gobierno de Morales entiende el papel del Estado en la economía:

“El Estado es lo único que puede unir a la sociedad, es el que asume la síntesis de la

⁴ Felipe Quispe es otro de los íconos líderes indígenas que ha luchado por reivindicar las identidades indígenas y por transformar el modelo neoliberal, pero a diferencia de Evo Morales, su discurso y praxis política fue siempre más radical y polarizada, llevándolo a no tener un respaldo popular amplio.

voluntad general y el que planifica el marco estratégico y el primer vagón de la locomotora económica. El segundo es la inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la microempresa; el quinto, la economía campesina; y el sexto, la economía indígena. Éste es el orden estratégico en el que tiene que estructurarse la economía del país” (Stefanoni, p.51).

Asimismo, y más allá que el discurso hegemónico del MAS haya causado el repliegue de ciertos sectores de oposición, como es la derecha afincada en el Departamento de Santa Cruz, la política actual en Bolivia ha comenzado verdaderamente a reflejar la pluralidad y diversidad sociocultural, reivindicando a una mayoría social que, pese a serlo siempre, ha estado históricamente dominada por una minoría blanca.

Por último, y siguiendo el análisis del sociólogo, Manuel Antonio Garretón, es interesante señalar que la política en Latinoamérica, previo al período neoliberal, tenía un doble sentido en la vida social; por una parte, dado el rol del Estado como motor del desarrollo, la política era percibida como una manera de acceder a los recursos del Estado, y por otra parte, entregaba una orientación de sentido a la vida social y en la constitución de identidades. Por lo que al desaparecer, a partir de un nuevo escenario donde la economía se erige como el sistema que regula las relaciones y decisiones en la sociedad, en palabras de Garretón (2002), comienza a haber una demanda de “sentido”, de orientación, de espacios de articulación entre distintos actores sociales, actores políticos y el Estado, que ni las fuerzas del mercado ni el universo mediático son capaces de satisfacer (p.20).

Sin duda que el triunfo del MAS y de Morales le han vuelto a entregar a la sociedad boliviana esa demanda por “sentido” político, esa necesidad de toda sociedad por ser parte de alguna suerte de epopeya política y ser guiadas hacia nuevos derroteros con la esperanza de una vida mejor. Muchas de las críticas al actual gobierno, es que no ha logrado crear mecanismos reales para superar la extensa pobreza y carencia que vive el pueblo boliviano, pero de lo que no existe duda, es que para la amplia mayoría social existe un discurso y un intento de praxis política que entrega sentido social y político a sus vidas, y las hace sentirse parte de un proyecto que logra sintonizar con sus demandas y reivindicaciones históricas.

V. CONCLUSIÓN

El que la sociedad boliviana haya elegido con una amplia mayoría a un Presidente indígena –reelecto por segunda vez en diciembre de 2009, con un 62% de apoyo-, con una clara ideología indigenista, nacionalista y marxista –aunque esta última siempre ha sido más marginal en relación a las otras dos-, y que se ha expresado, entre otras cosas, en la necesidad de reponer el papel del Estado en la economía, es porque ha existido una demanda social importante de una nueva articulación social y proyecto nacional. Por otra parte, es imposible desvincular este cambio político del sabor amargo que dejaron los casi 20 años de un neoliberalismo privatizador que reprodujo la pobreza ya existente y no trajo las promesas prometidas por la clase política.

De aquí la emergencia de los movimientos sociales y la etnificación de la política, que irrumpieron no sólo para protestar, sino sobre todo para participar políticamente y cooptar las estructuras del Estado. Y, principalmente con la llegada del MAS al gobierno, se ha podido dar aquella tendencia deseada de vinculación entre el mundo autónomo de los movimientos de protesta y las instituciones políticas que hicieron suyas sus demandas. Por consiguiente, esto es lo que fundamentalmente hemos catalogado como el regreso de la política en Bolivia, donde se intenta alcanzar una nueva dinámica social, donde el sistema económico deja de ser el núcleo central desde donde se piensa y articula las respuestas a las demandas de la sociedad por parte de aquellos que están en el poder.

Lo que vive hoy en día Bolivia, es una generalizada redistribución del poder. No sin dificultades y una gran polarización social, el gobierno de Morales ha tenido objetivos muy claros que se sintetizan en la creación de instancias que mejoren la igualdad del pueblo boliviano y permitan ampliar la democracia política a los ámbitos económicos y sociales. De este modo, se está presente ante un amplio proceso de democratización en Bolivia, que se expande a los ámbitos de decisión política que históricamente han estado controladas por los grupos sociales minoritarios. En este sentido, pareciera que el problema central que se vive no es cuánta redistribución se llegue a producir, sino, si la oposición política y social

terminará aceptando la emergencia de un nuevo núcleo articulador de la sociedad - compuesto mayoritariamente por los movimientos indígenas y sus líderes-, y donde la política asume ahora un rol protagónico como eje orientador de los planos económico y social.

Por último, y a modo de reflexión final, interesa decir algunas palabras sobre otro de los pilares sobre el cual el Gobierno de Morales está transformando y se está relacionando con la sociedad, y que dice relación con la creación de un Estado Autonomico que viene a profundizar un proceso de descentralización del poder al crear distintos niveles de autonomías sobre la base de un Estado Unitario común. El comienzo de este proceso fue la promulgación de la Constitución Política del Estado, donde se establecen nuevos regímenes autonómicos, es decir, a las ya preexistentes autonomías departamentales y municipales, se agregan dos más, la regional y la indígena originario campesina, todas ellas con autoridad de legislar en sus respectivos espacios y con competencias ejecutivas y fiscalizadoras amparadas por la Constitución. Hay varios elementos novedosos de este proceso, pero se destacan tres. Primero, esta facultad legislativa de las cuatro distintas autonomías, segundo, que se abren nuevos espacios de autogobierno para sectores antes excluidos, como es el caso de las autonomías indígenas, y tercero, que las competencias autonómicas que se le otorgaron a los departamentos y municipios en los años anteriores se habían alcanzado a partir de leyes y decretos a través de los años, mientras que esta vez, las facultades autonómicas de los distintos niveles, en términos generales, se han reunido en la misma Constitución Política. Y el detalle de las mismas, y el cómo se van a articular y convivir los distintos niveles de gobierno, es por medio de una Ley Marco de Autonomía y Descentralización que ya fue ratificada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y luego promulgada, el día 19 de julio de 2010, por Morales.

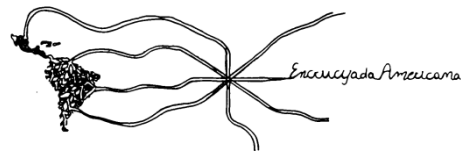
Es interesante notar, que este fenómeno de autogobierno en sus distintos niveles, sin subordinación de unos con otros salvo hacia el Estado, es parte de este proceso global que hemos analizado en el artículo respecto de la mayor preponderancia del plano político por sobre el económico, ya que no sólo la demanda histórica de autonomía indígena es reivindicada, sino también, porque se origina una descentralización política del poder que

provoca una transformación transversal del Estado boliviano. Entre los beneficios que pueden visualizarse están: la mayor autodeterminación ciudadana en torno a sus problemas de desarrollo en el marco del Estado Unitario, un mayor desarrollo intercultural y una mejor administración de los recursos públicos, en torno a su gestión y fiscalización. Asimismo, sobre la base de una transferencia democrática de competencias y una mayor y mejor gestión territorial, se quiere construir un Estado más fuerte a partir de un posicionamiento territorial de él en los distintos niveles autonómico. Sin embargo, junto a estos beneficios, es importante notar que también implica desafíos y amenazas, principalmente por la complejidad tecnológica para monitorear y supervisar el proceso, la multiplicación en el número de actores en los distintos niveles autonómicos que va a requerir una alta coordinación intergubernamental, y por último, la capacidad fiscal para sostener y apoyar a las mismas autonomías ■

BIBLIOGRAFÍA

- Archondo, R. (2009). La ruta de Evo Morales, *Nueva Sociedad*, n° 209.
- Barrios, F. (2007). ¿Cómo moderar el péndulo boliviano? De las privatizaciones a la recuperación del Estado. *Nueva Sociedad*, n° 207.
- Calderón, F. (2007). Oportunidad histórica: cambio político y nuevo orden sociocultural, *Nueva Sociedad*, n° 209.
- Constitución Política del Estado de Bolivia (2009). Preámbulo. En : <http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=469>
- Deheza, G. (2007). Bolivia 2006: Reforma estatal y construcción del poder, en *Revista de Ciencias Políticas. Anuario político de América Latina*, PUC, Vol. Especial, 2007.
- Garretón, M. (2002). La transformación de la acción colectiva en América latina, *CEPAL*, n° 76.
- Grebe, H. (2009). Estado y mercado en Bolivia: una relación pendular. *Nueva Sociedad*, n° 221.
- Habermas, J. (1992). *Teoría de la acción comunicativa*. Taurus.

- Lechner, N. (1996). Las transformaciones de la política, *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 58, n° 1.
- Luhmann, N. (2004). *La política como sistema*, Fondo de Cultura Económica.
- Natanson, J. (2007). Las reformas pactadas. Entrevista a Álvaro Lineras, *Nueva Sociedad*, n° 209.
- Nuestros Principios Ideológicos Movimiento al Socialismo- MAS.
- Programa de Gobierno MAS- IPSP. Bolivia digna, soberana y productiva para vivir bien.
- Santos, G. & Hernández, P. (2009). *Referéndum Constitucional de Bolivia de 2009*. Centro de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados, febrero de 2009.
- Stefanoni, P. (2007). Siete preguntas y siete respuestas sobre la Bolivia de Evo Morales, *Nueva Sociedad*, n° 209.
- Stiglitz, J. (2003). El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina. *Revista CEPAL*, n° 80.
- Touraine, Alain, *¿Podremos vivir juntos?*, Fondo de Cultura Económica
- Vergara, C. (2007). Ethnicity and Political Participation in Bolivia. *Anamesa, Democracy Issue, Spring 2007*
- Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Discurso del 30 de enero de 2010. En:
http://www.emborus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83%3Adiscurso-del-vicepresidente-del-estado-plurinacional-de-bolivia-&catid=34%3Anoticias&Itemid=63&lang=es&698f0cd46066298a31fa10d027f0173f=03b926a620cd99ccd9cd4626d4ccafbf
- Zovatto, D. (2005). *El parto de una nueva Bolivia*. BBC Mundo, 26 de diciembre de 2005.



Revista Encrucijada Americana. Año 3. N° 2. Primavera-Verano 2009-2010.

Universidad Alberto Hurtado

Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Cienfuegos 46 "A", 2° Piso, Santiago, Chile. Teléfono (56-2) 889 7476.

Email: america@uahurtado.cl